



Este artículo es una publicación de la Corporación Viva la Ciudadanía
Opiniones sobre este artículo escribanos a:

semanariovirtual@viva.org.co

www.viva.org.co

Política y violencia en Colombia

Luís Eduardo Celis

Coordinador del Programa de Política Pública de Paz de la Corporación Nuevo Arco Iris.

Contexto histórico

La sociedad colombiana se ha construido en medio de un permanente ejercicio de violencias, así lo fue en su proceso de independencia del coloniaje español, en su conformación como República Independiente vivió más de veinte guerras civiles y cerró el siglo XIX y le dio la bienvenida al siglo XX, con la más grande y extendida de ellas, la que se conoce en nuestra historia como la “Guerra de los mil días”, los triunfadores, el Partido Conservador impuso una relativa calma, producto de su supremacía e inicio por tres décadas de una “hegemonía conservadora”, que va a ser quebrada por la “República Liberal” y la “revolución en marcha”, liderada por Alfonso López Pumarejo, elegido presidente en 1934.

La violencia en Colombia, practicada como un mecanismo racional de ejercicio de la política, ha sido una obra constante, por medio del cual se dirimen los conflictos, se defiende un orden social o se le reta, en la historia del siglo XX, es claro como los intentos de modernización, entendida esta como la incorporación de derechos y reconocimiento de la existencia de grupos sociales nacientes, como lo fue la clase obrera en la década de los treinta o la importancia de la tierra, para millones de excluidos de ella y la necesaria modernización de las relaciones sociales en el campo colombiano; que mantenían relaciones de servidumbre y subordinación más asimiladas a formas feudales de organización que chocaban con las aspiraciones de autonomía y libertad de millones de desposeídos de la tierra.

Ese fue el trasfondo social que intentó transformar las iniciativas del presidente López Pumarejo, consignadas en la reforma constitucional de 1936, que estableció un intervencionismo del Estado en la regulación de la propiedad, a la cual le otorgó un sentido social, la propiedad debía responder a unos interés de bienestar y equidad y no era sola ni exclusivamente un mecanismo económico, para su momento toda una revolución en el sentido de proponerse transformar relaciones sociales, profundamente arraigadas, igual esfuerzo constituyó el reconocimiento legal de la organización de los trabajadores en asociaciones sindicales, el derecho de presentar pliegos colectivos y de negociarlos desde sus organizaciones y las posibilidades de huelga, tres mecanismos básicos:

organización, negociación colectiva y huelga, que le dieron a los trabajadores identidad y fuerza social.

El intento de modernización e inclusiones sociales del presidente López Pumarejo, fue respondido con una altiva y enérgica respuesta del Partido Conservador y los terratenientes que no iban a permitir la transformación democrática del campo colombiano, sin responder, y la respuesta no se hizo esperar. Desde el año 46, se desató una ola de violencia que enfrentaría el orden de propiedad rural en Colombia y propugnaría por una nueva fase de acumulación de propiedades en manos conservadoras y de antiguos y nuevos terratenientes, este ciclo conocido como la “violencia” nos dejaría cifras entre doscientos y trescientos mil homicidios y fue parcialmente documentado en el clásico libro “La violencia en Colombia” y empujó a las principales ciudades del país a millones de campesinos despojados o desposeídos de tierra, para que se incorporaran a un incipiente pero dinámico proceso de industrialización de mediados de los años cincuenta y que continuó en las décadas de los años sesenta y setenta, del siglo pasado.

La violencia como mecanismo de control y coerción fue ampliamente utilizada por conservadores, los liberales y comunistas igual respondieron con violencia, la de la “autodefensa” y las guerrillas liberales tuvieron una amplia simpatía y respaldo social, fundamentalmente en los Llanos Orientales, constituyéndose en una vigorosa fuerza social, política y militar.

Este ciclo de violencia y política se cierra con la instauración del “Frente Nacional” que ante la pérdida de control del rumbo del país por conservadores y liberales, por el golpe militar y el Gobierno de la junta presidido por el general Gustavo Rojas Pinilla, realiza un pacto de elites, para gestionar alternadamente el poder, por dieciséis años, lo cual pudo ser una acertada fórmula para poner punto final a una década de violencia y retomar el control del país, pero que en vez de sacar la violencia de la política, inauguró un nuevo ciclo de violencias, las violencias de la izquierda armada y la emergencia de un poder narcotraficante, aliado a los terratenientes, en lo que hoy conocemos como paramilitarismo, violencias que subsisten hasta nuestros días y que bien valen la pena un intento de explicación.

Una Colombia sin modernidad

América Latina vivió su propia modernidad, parcial y de manera desigual, fue poco a poco construyendo instituciones y consensos sociales más amplios, no sin pasar por ciclos de violencia como los vividos en el cono sur, que desembocaron en dictaduras desde los años sesenta hasta mediados de los ochenta en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, con pequeñas o extendidas guerras civiles en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, desde principios de los ochenta hasta mediados de los noventa, pero de una forma u otra han salido de la violencia en la política, con pactos, modernizaciones políticas y mecanismos de regulación más o menos efectivos, pero Colombia no, este proceso es al que hace referencia Alain

Touraine¹, cuando dice que en América Latina hay dos mundos, el de la palabra y el de la sangre, que ubica a los mundos de incluidos y excluidos, la exclusión sigue vigente en América Latina, pero la violencia como mecanismo para agenciar la disputa por el poder o la consolidación de ordenes regionales hegemónicos – la lucha por el control más o menos efectivo de un territorio- sólo sigue vigente en Colombia, luego de la emergencia y el declive o integración de estas experiencias post revolución Cubana.

En Colombia surgieron tres tipos de organización no estatales para la disputa del poder, desde mediados de los años sesenta; una de raíces campesinas y confluencia con el Partido Comunista, que son las Farc –y de cierta forma el EPL-, una pensada por estudiantes e intelectuales, que se encuentra con una rebeldía cristiana y que echa raíz en las zonas marginales de un campesinado excluido que es el ELN y un novedoso proyecto de modernización de las guerrillas campesinas, con vocación urbana y un discurso no comunitarista y centrado en la democracia que fue el M-19.

Entrados ya en el siglo XXI, la democracia en Colombia es tremendamente precaria, pese a unos intentos de modernización e inclusiones –como en el resto del continente- al cual concurren una buena parte de las guerrillas colombianas, lideradas por el M-19 y que tuvieron en el proceso constituyente de 1991, un “pacto parcial de paz”, al cual le sobrevino un nuevo ciclo de guerra, liderado por la fuerza paramilitar, que es la expresión de una clase narcotraficante, aliada a los viejos terratenientes y la clase política local que se han resistido a las inclusiones, a la modernización, a esa vieja modernización de la Europa del siglo XIX y hoy en crisis, que reconoce derechos, regula la economía, permite la competencia, integra política y economía, todo eso que esta en crisis en el norte y que nunca fue posible en Colombia y en América Latina, con el agravante de que aquí se siguen defendiendo los privilegios no con la palabra sino con la sangre, pero no la sangre de los poderosos de siempre, sino la sangre de los excluidos de siempre, que bien reflejan la formulación de que “esta es una guerra de hombres jóvenes, católicos y pobres, que visten uniformes diferentes, defienden interés diferentes, pero comparten rasgos similares”².

En medio de estos ciclos permanentes de violencia, que más parecen riachuelos que grandes ríos – no se sabe si afortunada o desafortunadamente- la sociedad Colombiana como formulación de conjunto, se mueve entre la indiferencia y la acción, es tímida la respuesta de la Colombia urbana que no sabe lo que transcurre en las otras Colombias, las que sufren día a día desde siempre, el autoritarismo de derechas o de izquierdas que defendiendo o retando un orden hacen uso de la violencia, por momentos emerge un sentido de responsabilidad y una acción colectiva que levanta la voz contra el atropello, denuncia la barbarie y propone un punto final a la arbitrariedad, quizás allí se asome ese sujeto del que

¹ TOURAINE ALAIN, ¿Podremos vivir juntos?. Fondo de Cultura Económica, 2000, pág. 51.

² Esta expresión en de Francisco Gutiérrez Sanín, investigador del IEPRI.

nos habla Touraine³; el que “existe al movilizar el cálculo y la técnica, del mismo modo que la memoria y la solidaridad, y sobre todo al combatir, indignarse, esperar, inscribir su libertad personal en las batallas sociales y las liberaciones culturales”, ese sujeto está vivo en la sociedad colombiana, pese a tanto sufrimiento y desconocimiento, pero aún no logra cobrar cuerpo y presencia nacional, es marginal y disperso, le falta el carácter de la fuerza de quien emprende una ruptura histórica, esta en ciernes a pesar del tiempo transcurrido y no es cierto el saber si logrará constituirse como actor de una “modernidad” postergada, que ya no fue en tiempos de la crisis de ésta, pero nos corresponde buscar un orden social, que sea posible e integrador de la pluralidad, una pluralidad, que conviva bajo la premisa de libertades y derechos universales, sin exclusión ni atropellos, puede parecer, la vieja promesa de la modernidad, pero es necesario contar con un horizonte compartido.

El sueño postergado de la democracia

Colombia ha tenido instituciones, separación de poderes, elecciones regulares, pero este conjunto es más una ilusión de democracia, que un verdadero proyecto democrático, esta democracia de baja intensidad, como la han llamado algunos autores, ha convivido con la violencia, es más la ha agenciado y la sigue agenciado o que otra cosa son los sistemáticos crímenes de las fuerzas armadas contra jóvenes pobres que en busca de un ingreso así sea precario, han muerto por las balas oficiales o el control ilegal de todo lo que suene a oposición y disenso y todo esto se da en medio de las ilusiones de democracia, una democracia que no ha sido capaz de tener el monopolio legítimo de la violencia como no lo ha enseñado la teoría política sobre el Estado.

Fue durante la primera fase de la modernización, “la alta modernidad” a la que se refiere Touraine, cuando las categorías políticas de Estado y democracia fueron aplicadas a todos los dominios de la vida social. La preocupación dominante era asegurar el orden contra el desorden, la paz interior contra la violencia y la integración de la sociedad contra la arbitrariedad de un príncipe o un jefe de guerra, todo esto sigue aplazado en la sociedad Colombiana, invadida de “señores de la guerra” y de un Presidente que actúa más como príncipe.

En medio de estas precariedades, ha surgido en Colombia, sin duda, la noción de ciudadanía que se basa en el reconocimiento de los derechos políticos, pero todo esto ha sido vana ilusión en Colombia, donde la exclusión impera y el ser ciudadano con deberes y derechos aplica parcialmente, es una democracia formal, lo cual ha quedado muy bien formulado en la tesis gaitanista del país real y el país formal, hay muchas Colombias, como ya lo hemos expuesto, Colombias que se distancian del anhelo de democracia y orden que animó el proyecto de la modernidad, nunca realizado en Colombia.

³ TOURAINE ALAIN, ¿Podremos vivir juntos?. Fondo de Cultura Económica, 2000, pág. 67.

Una de las principales limitaciones para la consolidación de un proyecto democrático formal en Colombia, ha sido la persistente permanencia de la violencia agenciada por organizaciones que han intentado, de manera muy perseverante, imponer un proyecto de sociedad, que nos vemos en dificultad para caracterizar; estatista?, comunitarista?, -utilizando las categorías de Touraine, de democracia profunda?, ha pasado mucha agua bajo el molino de la historia nacional y lo cierto es que en aras de buscar una “revolución” en la Colombia de los años sesenta, luego de cinco décadas el balance es desconsolador, para quienes se propusieron una ruta de transformaciones, la sociedad colombiana del 2009 es más antidemocrática en muchos sentidos y la existencia de organizaciones que recurren a la violencia le ha sido perfectamente funcional a los modelos más antidemocráticos, con las guerrillas en plena acción fue posible adelantar una contrarreforma agraria, que expulsó cinco millones de personas de sus hogares y reconcentro cinco millones de hectáreas.

La violencia de los narcotraficantes, terratenientes y elites regionales que confluyeron en el paramilitarismo de los años noventa pudo realizar la operación más grande de distorsión de la democracia formal, al tomarse a sangre y fuego el control de las instituciones estatales a todos los niveles: las alcaldías y concejos municipales, muchas gobernaciones y asambleas departamentales, la instrumentalización de Fiscalía, de la justicia, de la Policía y la Fuerza Pública, del Congreso e influir en el Poder Ejecutivo Nacional, lo que hoy podemos englobar como la parapolítica, no fue sino un gran control del Estado al servicio de la ilegalidad y el crimen, todo con la complicidad de grandes poderes instituidos y la indiferencia de las mayorías nacionales o la impotencia de minorías que bien podemos llamar de la media modernidad.

La modernidad tenía una promesa de tolerancia, respeto a las diferencias, ejercicio de libertades, ese sentido de multiculturalidad, donde la convivencia es posible y hay un orden social de garantías y respeto, eso es un propósito y un deseo para la Colombia del presente, aún en medio de la crisis de la vida en sociedad, hay unos mínimos que pueden y deben permitir la vida en sociedad, que no han sido posibles ni vigentes en Colombia.

La violencia en la política en Colombia

El recurso a la violencia organizada e instrumentalizada para fines políticos es atávico en la historia nacional, de ella han hecho uso; conservadores, liberales, comunistas, narcotraficantes, el espectro político y social es amplio en sus vínculos con la idea de imponer, subyugar, aniquilar, y su explicación no es fácil de plantear, ¿porqué el permanente recurso de la violencia en la política Colombiana?; por la precariedad de un consenso social?, por las grandes desigualdades sociales que llevan a una rebelión armada?, ¿por la falta de un Estado que se imponga y funcione en todo el territorio?, por una Nación que no termina de configurarse como tal?, quizás todas las anteriores razones tengan algo de fuerza explicativa, para el interrogante de política y violencia en la sociedad Colombiana.

La teoría sobre violencia expuesta por Michel Wieviorka, nos presenta tres grandes corrientes explicativas: la que se explica desde un sentido de crisis social, que se encuentra ligada a la generación de frustraciones de grupos sociales significativos, la idea de uso de la violencia para acceder a bienes y servicios, de los cuales no se dispondría, o muy difícilmente, sino se recurriera a la violencia y una tercera vertiente explicativa que centra el uso de la violencia en la construcción y afirmación de una personalidad que se construye desde el ejercicio de la violencia⁴, para el caso colombiano, una articulación de las tres vertientes explicativas nos pueden acercar a una comprensión más ajustada de lo que hemos vivido como procesos de violencia y política.

Las organizaciones que surgieron en los años sesenta y que subsisten hasta nuestros días; FARC y ELN, pueden catalogarse en la línea interpretativa de quienes surgen por desarreglos sociales, que aspirando a su transformación se constituyen con esa finalidad, en pocas palabras, la lucha por el poder, como ejercicio global de reordenamientos, pero al no lograr ese propósito –entre otras razones, la fundamental, por no contar con un amplio y mayoritario apoyo social-. Devienen en organizaciones que en el horizonte de su actuación y auto-justificación, mantienen el discurso político de la lucha contra las desigualdades y la aspiración de poder, pero en la realidad, su constitución y ejercicio de violencia cotidiano, es para acceder a bienes y recursos, que de otra forma no lograrían, es decir su actuación se concentra en fines inmediatos de rentas y recursos, coerción para ser acatados y no respetados, temidos al máximo y en donde los individuos que se van involucrando, las nuevas generaciones se socializan en la mecánica de violencia que reafirma y da preponderancia a su personalidad, desde agentes de violencia.

Para el caso colombiano, lo que complejiza una reflexión sobre política y violencia es que ésta, la violencia, se encuentra muy extendida en la sociedad, si bien y afortunadamente no es en la gran mayoría de la sociedad, el recurso a la violencia si ha contado con una aceptación, respaldo el involucramiento directo de importantes grupos y comunidades, no es una violencia de élites o aparatos reducidos, muy por el contrario son estructuras sociales, las que han dado fuerza al propósito organizativo de agenciar violencia, hasta el extremo que sectores de la Iglesia Católica se vieron involucrados desde una lectura ideológica de la “teología de la liberación” en ejercicios de violencia, para el caso del ELN, considerado en su formas y sus lógicas de actuación comunitaria como una “pastoral armada”, muchos de sus frentes guerrilleros rurales, fueron originados en el trabajo y la persuasión de curas, monjas y agentes de pastoral, este ejemplo nos evidencia los grados de involucramiento institucional y social, cuando de analizar la violencia como mecanismo de actuación política se trata.

Tras tantos años de ejercicio sistemático de la violencia, su sentido y aceptación se han desvalorizado, hoy la violencia que reta el orden está en las fronteras físicas y sociales de Colombia, allí se mantiene por el viejo problema agrario no

⁴ WIEVIORKA MICHEL, Repensar la violencia, Revista Trayectorias, número 23, abril de 2007. Pag. 49.

resuelto que se complejizó al yuxtaponerse el narcotráfico, que encontró en la rebeldía de los campesinos colonizadores, mil veces atropellados, la fuerza social para su instalación en un país donde no existía ampliamente una tradición de cultivos, llevados a la ilegalidad, este conflicto que ha mutado de razones ideológicas y lucha por el poder, al énfasis de control de comunidades y territorios, sin perder sus razones ideológicas y de poder, del todo, sigue sin resolverse, en medio de una realidad, en donde los de signo contrario, los que han defendido el orden de propiedad rural, son nuevamente triunfadores en su modalidad de nuevos terratenientes, promovidos desde la acumulación narcotraficante.

El sujeto que puede resolver la crisis y sacar a Colombia de la violencia

Superar el ejercicio de la violencia en la política, o la pretensión de defender o imponer nuevos ordenes sociales, vía intimidación sigue siendo una tarea vigente y urgente en la sociedad colombiana, no podemos continuar por estas sendas de imposiciones y arbitrariedad, requerimos de consensos amplios, pactos civilizatorios, instituciones reguladoras, es un poco ir en contravía de esta baja modernidad que desconfía de estos mecanismos, pero a los cuales nosotros como experiencia social no hemos accedido, es algo así como construir modernidad cuando ella esta en crisis, pero nos corresponde asumir un proceso de ordenamientos donde se ponga al centro un sujeto individual y colectivo capaz de dar vía un nuevo orden social, donde no será la panacea de la felicidad de la que nos llamaba a desconfiar Estanislao Zuleta en su clásico texto “Elogio a la dificultad”, pero si una nueva realidad donde el conflicto se pueda tramitar de manera institucional⁵, es decir bajo mecanismos de una democracia regular, con garantías y sentido de bienestar, con controversia y debate público en busca de un buen vivir.

Este sujeto, civilizatorio, si se me permite la expresión desvalorizada, es un sujeto que integra las dimensiones privadas y publicas, que no se escinde ni particulariza en sus intereses inmediatos, que tiene un sentido de historia y responsabilidad con la especie humana y con un sentido de nación, que aunque debilitada o muy morigerada en el concierto de las naciones sigue presente, es el sujeto que porta un proyecto de sociedad humana integral, sin discriminación y capaz de reconocer su pasado, su presente y trazar una idea de futuro compartido.

La violencia que nos ha constituido o alejado de un proyecto de Nación, en medio de un presente con tantas incomprendiones es uno de los puntos a superar, no el único, de una Colombia que sigue dando tumbos en medio de un mundo donde los desafíos cada vez son mayores y que bien pueden ocupar nuestras energías e imaginación si sabemos sortear este viejo lastre de relacionarnos o distanciarnos vía violencia.

Referencias

⁵ WIEVIORKA MICHEL, Violencia y Paz, Revista Colombiana de Sociología, No. 28, 2007. Pag. 21.

ARTEAGA BOTELLO NELSON. Repensar la violencia – Tres propuestas para el siglo XXI. Revista Trayectorias, No. 23. Enero-abril de 2007.

TOURAINÉ ALAIN. Podremos vivir juntos?. Fondo de Cultura Económica, 2000.

WIEVIORKA MICHEL. Violencia y paz. Revista Colombiana de Sociología, No, 28, 2007.